

# La orden ejecutiva de Trump podría cambiar las elecciones en Connecticut, pero ¿es legal?

Por Ken Dixon  
CT INSIDER

La administradora electoral principal de Connecticut criticó el miércoles la orden del presidente Donald Trump sobre seguridad electoral nacional, calificándola de intento “descuidado” y “desalentador” de disuadir a los residentes del estado de ejercer su derecho constitucional al voto.

Minutos después de que la secretaria de Estado, Stephanie Thomas, ofreciera una conferencia de prensa criticando la orden de la Casa Blanca, que otorgaba a los estados 30 días para cumplir con diversas medidas, incluyendo la exigencia de demostrar la ciudadanía estadounidense de los votantes, el fiscal general William Tong se unió a ella para calificarla de ilegal. La orden también exigiría que las papeletas de voto por correo se recibieran antes del día de las elecciones, que las papeletas no pudieran usar códigos de barras ni códigos QR para su conteo y que se prohibiera a los extranjeros realizar donaciones.

“Este es un intento ilegal de suprimir y manipular elecciones libres y justas en todo Estados Unidos, por parte de un dictador aspirante desquiciado que aún busca reescribir la historia para borrar



Los votantes emitieron su voto durante una elección especial para un escaño vacante en la Cámara de Representantes de Minnesota, en el Distrito 40B, en la Iglesia Episcopal de San Cristóbal en Roseville, Minnesota, el martes 11 de marzo de 2025. (John Autey/Pioneer Press via AP)

su derrota de hace más de cuatro años”, declaró Tong en un contundente comunicado a última hora de la mañana. Desde 1788, tal como se explica claramente en el Artículo 1 de la Constitución y reiteradamente confirmado por la Corte Suprema, las elecciones las organizan los estados. Se trata de que Donald Trump intenta elegir quién vota en este país, y eso no es democracia.

Tong afirmó haber estado consultando con los fiscales generales de otros estados para evaluar las opciones legales, y Thomas, en declaraciones a la prensa en su oficina del Capitolio Estatal, anticipa desafíos a nivel nacional contra la orden de Trump. Thomas afirmó que la orden podría desalentar a

los votantes en residencias de ancianos, a las personas casadas que cambiaron sus apellidos, al personal militar en el extranjero y a quienes no tienen pasaporte ni certificado de nacimiento.

“Connecticut no necesita otro edicto descuidado de la Casa Blanca”, declaró Thomas, enfatizando que la orden de Trump del martes incluye la amenaza de cortar la financiación federal a las fuerzas del orden en todo el estado si no cumple en el plazo de un mes. “En lugar de protegernos, es otra exlimitación ilegal e inconstitucional en nuestros procesos electorales. También es un intento de eludir al Congreso”.

Describió los procesos electorales actuales de Con-

necticut como “sólidos y seguros” y ya incluyen disposiciones como la prohibición de las contribuciones federales a las campañas; el recuento de votos únicamente el día de las elecciones; y el uso de papeletas de voto.

“Esta orden ejecutiva debilitaría nuestro sólido sistema al dificultar que todos los votantes elegibles de Connecticut emitan su voto y encarecería considerablemente el proceso para los contribuyentes de Connecticut”, declaró Thomas, añadiendo que la carga para los funcionarios electorales locales sería “astronómica”. Se tendrían que imprimir y distribuir cientos de miles de nuevos formularios de registro en cada municipio. Se requeriría el registro

presencial para hasta 200.000 nuevos votantes cada año.

Connecticut recibe entre 900.000 y 1,3 millones de dólares en apoyo federal anual para las elecciones, pero se ha comprometido a emitir bonos a largo plazo por 20 millones de dólares en nuevos tabuladores de votos.

Los funcionarios electorales locales estarían facultados para juzgar la autenticidad de los pasaportes y certificados de nacimiento bajo la orden de Trump. “Se acabará el registro de votantes en línea, que es como se registra el 33% de los residentes de Connecticut”, declaró. “Se supone que todo esto sucederá en los próximos 30 días. Francamente, es un liderazgo y una planificación descuidados”. Thomas se

mostró reacia a usar el término “supresión de votantes” para describir la orden presidencial, pero afirmó que los votantes se desanimarían fácilmente.

“Esta Casa Blanca solo puede ser descrita como una abusadora”, declaró. “Intentan eludir al Congreso con esta orden ilegal. Es coercitiva y, quizás lo más aterrador para mí, tiene el potencial de provocar que los votantes se abstengan de participar en las elecciones por miedo a cometer un error o a enfrentar posibles consecuencias legales, o simplemente porque no tienen tiempo para sortear todos estos obstáculos adicionales. Y quizás eso sea, en última instancia, lo que la Casa Blanca quiere”.

El representante estatal Matt Blumenthal, demócrata por Stamford y copresidente del Comité de Administración Gubernamental y Elecciones, que tenía previsto debatir y votar el miércoles decenas de proyectos de ley, incluyendo legislación electoral que incluye las disposiciones de la enmienda a la Constitución estatal que permite el voto en ausencia sin justificación, aprobada por abrumadora mayoría el otoño pasado, estimó que exigir prueba de ciudadanía a los votantes podría privar del derecho al voto al 10% de los 2,2 millones de votantes registrados del estado.

WASHINGTON (AP) — En una importante reestructuración, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos despedirá a 10.000 trabajadores y cerrará agencias enteras, incluidas aquellas que supervisan miles de millones de dólares en fondos para servicios de adicción y centros de salud comunitarios en todo el país.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr criticó al departamento que supervisa como una “burocracia desmesurada e ineficiente” en un video anunciando la reestructuración el jueves. Culpó a los 82.000 trabajadores del departamento por el declive en la salud de los estadounidenses.

Kennedy afirmó en el video, publicado en las redes sociales: “Quiero prometerles ahora que vamos a hacer más con menos”.

Kennedy reconoció que será un “período doloroso” para las principales agencias de salud del país, que son responsables de monitorear enfermedades infecciosas, inspeccionar alimentos y hospitales y supervisar programas

## Departamento de Salud de EEUU recortará 10.000 empleos como parte de reestructuración



La sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Washington, el 5 de abril del 2009. (AP foto/Alex Brandon)

de seguro de salud para casi la mitad del país.

En general, el departamento se reducirá a 62.000 puestos — perdiendo 10.000 empleos a través de despidos y otros 10.000 trabajadores que aceptaron ofertas de jubilación anticipada y separación voluntaria.

El jueves, la agencia proporcionó un desglose de los recortes en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS):

— 3.500 empleos en la FDA, que inspecciona y establece estándares de seguridad para medicamentos, dispositivos médicos y alimentos.

— 2.400 empleos en el CDC, que monitorea brotes de enfermedades infecciosas y trabaja con agencias de salud pública en todo el país.

— 1.200 empleos en el NIH, el principal brazo de investigación en salud pública del mundo.

— 300 empleos en CMS, que supervisa el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Medicare y Medicaid.

En su declaración, la agencia dijo que anticipa que los cambios ahorrarán 1.800 millones de dólares por año, pero no proporcionó un desglose ni otros detalles sobre los ahorros. El departamento tiene un presupuesto anual de 1,7 billones de dólares, la mayor parte del cual se dedica a financiar los programas de Medicare y Medicaid utilizados por estadounidenses mayores, discapacitados y pobres.

Más allá de la pérdida de trabajadores, Kennedy anunció que cerrará agencias enteras, algunas de las cuales fueron establecidas por el Congreso hace décadas.

Varias agencias se integrarán en una nueva Administración para una América Saludable, dijo Kennedy.

Estas incluyen la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que supervisa y proporciona financiamiento para cientos de centros de salud comunitarios en todo el país, así como la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, que financia clínicas y supervisa la línea directa nacional 988. Ambas agencias inyectan miles de millones de dólares en trabajo directo en las comunidades locales.

La Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica, creada por una ley firmada por el entonces presidente George W. Bush y responsable de mantener la reserva nacional que se agotó rápidamente durante la pandemia de COVID-19, se integrará en el CDC.